

**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.-**

El suscrito **MAESTRO ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**, en mi carácter de Secretario del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción IV del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 2 y Título Séptimo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua, me permito someter a consideración de este Órgano Colegiado el Proyecto de Resolución derivado del expediente **RA05/2023** del índice de la Subsecretaría Jurídica adscrita a esta Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, para que en términos de la legislación vigente al momento de la interposición del recurso de referencia y según lo dispuesto por el artículo 28 fracción XXXI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, lo resuelva definitivamente.

**CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**

Visto para dictar resolución en los autos del Recurso Administrativo de Revisión número **RA05/2023** interpuesto por los CC. [REDACTED] y [REDACTED] y de las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierten los hechos relevantes y las consideraciones que a continuación se describen:

Gobierno Municipal 2024-2027

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Que mediante escrito recibido en fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés en la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, turnado a esta Subsecretaría Jurídica adscrita a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento en fecha dieciséis de febrero del dos mil veintitrés por el Lic. Javier Armando Mejía Jacobo, en esa fecha, en su carácter de Secretario Particular del Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, comparecieron los CC. [REDACTED], a interponer Recurso Administrativo de Revisión, según señalan textualmente los recurrentes, en contra de:

"...la resolución contenida en el oficio número TM/SC/DV/0084/2023 de 12 de enero del 2023, emitido por el Subdirector de Catastro de la Tesorería Municipal de Chihuahua, notificado el treinta de enero del curso..." (SIC).

SEGUNDO. Por Acuerdo Administrativo de fecha siete de marzo del dos mil veintitrés se radicarón los presentes autos bajo el número **RA05/2023** y mediante el mismo acuerdo se ordenó girar atento oficio a la **TESORERIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, a efecto de que remitiera el informe respectivo y las constancias necesarias para determinar la existencia del acto impugnado, las razones que lo justifiquen y la fecha de su notificación; lo que fue cumplimentado por la Autoridad Recurrida en fecha trece de abril del dos mil veintitrés.

TERCERO. Derivado del informe remitido por la **TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, en fecha diecisiete del abril del dos mil veintitrés se dio vista a los CC. [REDACTED] para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, a lo cual se dio contestación por los recurrentes en fecha veintisiete de junio del año dos mil veintitrés.

CUARTO. En vista de lo anterior, en fecha veintiuno de agosto del dos mil veintitrés se admitió el Recurso Administrativo de Revisión interpuesto por los [REDACTED], en contra del acto señalado en el resultando primero de la presente resolución.

QUINTO. En auto descrito en el resultando anterior, se determinó no abrir periodo probatorio y en consecuencia se abrió fase de alegatos concediendo un término de tres días hábiles a ambas partes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 203 fracción V del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

SEXTO. Mediante escrito recibido en la Subsecretaría Jurídica adscrita a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua el día veintiocho de agosto del dos mil veintitrés, comparecieron los recurrentes a formular alegatos.

SEPTIMO. Mediante proveído de fecha trece de septiembre del dos mil veintitrés se declaró cerrada la etapa de alegatos por haber transcurrido el término concedido a ambas partes para que expresaran los mismos, en consecuencia, se ordenó traer los autos a la vista a fin de formular el Proyecto de Resolución correspondiente, lo que se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que es facultad del Secretario del Honorable Ayuntamiento formular el Proyecto de Resolución de los Recursos Administrativos interpuestos en contra de los actos que dicten las autoridades municipales, de conformidad con lo establecido

en los artículos 63 fracción IV del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, artículo 2 y Título Séptimo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua es competente para conocer y resolver en definitiva el presente Recurso Administrativo de Revisión, según lo señalado en los artículos 28 fracción XXXI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; artículo 2, Título Séptimo y artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua.

TERCERO. En cuanto a la procedencia del recurso, tenemos que el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua dispone que las personas interesadas afectadas por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer el recurso de revisión; por lo que como presupuesto procesal para la procedencia de tal recurso, es indispensable la existencia de un acto proveniente de una autoridad municipal distinta al Ayuntamiento, misma que en la especie quedo plenamente probado mediante la documental consistente en oficio TM/SC/DV/0084/2023 de fecha doce de enero de dos mil veintitrés signada por el Ing. Francisco Olvera Yáñez en su carácter de Subdirector de Catastro de la Tesorería Municipal de Chihuahua aportada por la parte recurrente en original y por la autoridad recurrida en copia certificada; documentales que constituyen el acto impugnado en el recurso inicial, y que adquieren valor probatorio pleno, por ser de las que establece el artículo 295 tercer párrafo y 296 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua en relación al artículo 349 del mismo ordenamiento, ambos de aplicación supletoria según lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua. Pues bien, con tal probanza, se estima que se acredita la plena existencia de la emisión del acto impugnado, en consecuencia se han cubierto los extremos del artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua.

CUARTO. En cuanto a los agravios manifestados por la parte recurrente, en su escrito recursal, se omite realizar su transcripción integra por economía procesal y por no existir disposición que obligue a ello, lo anterior, con fundamento en la Tesis de Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Novena Época, en materia común del Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro digital número 164618, que señala lo siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

Sin embargo, los mismos se pueden resumir en las siguientes expresiones de la parte recurrente:

1. "El oficio que se combate, no se ajusta a las exigencias del artículo 31 fracción IV de la constitución, pues debe contribuirse de una manera **proporcional y equitativa** conforme dicten las leyes."
2. "...la resolución combatida, se encuentra carente de fundamentación y motivación..."

Ahora bien, para acreditar lo anterior, quienes recurren allegaron como medios de convicción las siguientes pruebas:

A) Documental Pública consistente en original del oficio número TM/SC/DV/0084/2023, de fecha doce de enero de dos mil veintitrés signado por el Ing. Francisco Olvera Yáñez en su carácter de Subdirector de Catastro Municipal; prueba que se perfecciona al haber sido aportada en copia certificada por la autoridad recurrida; misma que por ser de las que mencionan los artículos 295 tercer párrafo y 296 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua y mediante la cual se tiene por acreditada la existencia y contenido del acto impugnado.

B) Documental Privada consistente en expediente administrativo que obra en los archivos de la autoridad que emitió la resolución del dieciocho de octubre del dos mil veintidós mediante oficio TM/SC/2510/2022, misma que, en su momento procesal oportuno se tuvo por desechada, toda vez que del escrito inicial se desprende que el acto pretendido por quien recurre corresponde al oficio TM/SC/DV/0084/2023 que corresponde a la actualización catastral del periodo anual 2023, mientras que la prueba ofrecida corresponde a época diversa y cuenta con el carácter de cosa juzgada no existiendo así relación directa con el acto controvertido, para lo cual sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia identificada con el número 239730, de la Tercera Sala, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, en la Página 262, que a la letra señala:

“PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO NO GUARDEN RELACION CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, POR SER INCONDUCTENTES O INCONGRUENTES. De acuerdo con uno de los principios procesales fundamentales, debe existir congruencia entre los hechos de la demanda, los de la contestación y las pruebas. Dicho requisito de congruencia está consagrado, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 155, fracción V, que ordena la narración de los hechos con claridad y precisión; en el 260, que dispone que el demandado formulará la contestación en los términos prevenidos para la demanda; en el 266, que obliga al demandado a referirse a los hechos aducidos por el actor; en el 278, que establece el poder del juzgador para traer a juicio prueba sobre los puntos controvertidos; en el 279, que consagra la facultad de los tribunales para ordenar diligencias para mejor proveer sobre los puntos cuestionados; en el 284, según el cual sólo los hechos están sujetos a pruebas; en el 285, que establece que el tribunal debe recibir las pruebas si se refieren a los puntos cuestionados; y en el 291, que obliga a ofrecer las pruebas relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos y que sanciona con el desechamiento de las mismas, la falta de relación, en forma precisa. Luego entonces, si el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado, los de sus excepciones, debe concluirse que, tanto por el sistema legal como por el principio de economía procesal, deben desecharse las pruebas que no guarden nexo o relación con los hechos controvertidos, por ser incongruentes respecto de ellos, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el litigio -ya sea en litis cerrada o en litis abierta- debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad o la fijación formal de la litis; de modo que sobre aquello que no existe controversia la prueba es inconducente y en tratándose del derecho, el Juez tiene el deber de conocerlo sin que el mismo esté sujeto a prueba como carga de las partes.”

C) Documental Publica consistente el plano autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Chihuahua en fecha diez de enero del

año dos mil dos aprobado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua; a la cual no se le otorga valor probatorio pleno, toda vez que este, es un plano expedido hace veintidós años, por lo que, si bien es cierto, se pueden acreditar las condiciones en las que el bien inmueble se encontraba en aquel entonces, es imposible derivar de la presente documental probatoria las condiciones actuales del bien inmueble en cuestión.

D) Presuncional Legal y Humana, así como la Instrumental de actuaciones, misma que, por ser de las que mencionan los artículos 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 234 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

Derivado de lo anterior, se admitió documental pública consistente en original de la comparecencia de la C. [REDACTED] de fecha treinta de enero del dos mil veintitrés mediante el cual se da por notificada del oficio TM/SC/DV/0084/2023, prueba que se perfecciona al haber sido aportada en copia certificada por la autoridad recurrida; misma que por ser de las que mencionan los artículos 295 tercer párrafo y 296 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua y mediante la cual se tiene por acreditada la existencia y contenido del acto impugnado.

Ahora bien, derivado del informe rendido por la autoridad recurrida el día veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, se rindieron las siguientes pruebas:

A) Documental pública, consistente en copia certificada del oficio número TM/SC/DV/0084/2023, de fecha doce de enero de dos mil veintitrés, signado por el Ing. Francisco Olvera Yáñez en su carácter de Subdirector de Catastro Municipal; prueba que se perfecciona al haber sido aportada en original por los recurrentes; misma que por ser de las que mencionan los artículos 295 tercer párrafo y 296 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Código

de Procedimientos Civiles y mediante la cual se tiene por acreditada la existencia y contenido del acto impugnado.

B) Documental pública, consistente en copia certificada de acta de comparecencia realizada en fecha treinta de enero del año dos mil veintitrés prueba que se perfecciona al haber sido aportada en original por los recurrentes; misma que por ser de las que mencionan los artículos 295 tercer párrafo y 296 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua y mediante la cual se tiene por acreditada la existencia y contenido del acto impugnado.

QUINTO. Procediendo al análisis de los agravios expresados por la parte recurrente, tenemos que el agravio primero, resulta insuficiente e infundado, toda vez que, quien recurre, deriva la ilegalidad del acto de una resolución de amparo que corresponde a anualidades anteriores del cobro predial, es decir, a actos aislados y diversos y no de la ley vigente y aplicable al caso en particular.

Ahora bien, cabe resaltar que el amparo en mención, que, resulta ser un hecho no controvertido dentro del presente expediente, pues ambas partes manifiestan contenido de la resolución de dicha acción, misma que a palabras del recurrente establece:

“... 2. En su lugar, se realice el cálculo del impuesto predial de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós, en el cual se aplique a los inmuebles del promovente el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo con la tipología de los inmuebles del quejoso, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento que se encuentre.” (SIC)

En virtud de dicha manifestación es evidente que la multicitada resolución de amparo ordena la aplicación de un impuesto predial diverso y menor al que, según el propio dicho de la autoridad federal no correspondiera a la ubicación de este, sin embargo, dicha ordenanza fue emitida única y exclusivamente para los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós por lo que cuenta con un carácter limitante a dichas anualidades.

Ahora bien, del estudio del presente agravio se desprende, que según lo dispuesto por el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua establece que

la base del impuesto es el valor catastral del inmueble, mismo que es determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades.

Derivado de lo anterior, tenemos que el artículo 23 de la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua dispone que el valor catastral es calculable mediante la siguiente fórmula:

$$\text{VALOR CATASTRAL} = \text{VALOR DEL TERRENO} + \text{VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN}$$

Ahora bien, para la obtención del VALOR DE TERRENO y VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN son utilizadas las siguientes formulaciones contenidas en el artículo 23 de la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua:

VALOR DE TERRENO= (SUPERFICIE DEL TERRENO) (VALOR UNITARIO DEL SUELO CORRESPONDIENTE A LA ZONA HOMOGenea, SECTOR O CORREDOR DE VALOR DONDE SE UBICA EL INMUEBLE)

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN= (SUPERFICIE CONSTRUIDA) (VALOR UNITARIO DE CONSTRUCCIÓN PARA CADA TIPO DE EDIFICACIÓN) + VALOR DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES.

De lo cual cabe resaltar que, los valores de la fórmula tocante al valor de la construcción se encuentran contenidos en las Tablas de Valores Unitarios y Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio.

En dicha tesitura, tenemos que, según lo manifestado por ambas partes la superficie del terreno 483.36 m² (cuatrocientos ochenta y tres punto treinta y seis metros cuadrados) y conforme lo dispuesto por la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2023, la propiedad cuenta con un valor unitario por metro cuadrado de \$5,087.00 (cinco mil ochenta y siete pesos 00/100) el **VALOR DE TERRENO** es de **\$2,458,852.32 (dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos 32/100 M.N.)** por lo que se concluye que el calculo de dicho valor es el correcto.

Así mismo al realizar el cálculo correspondiente al **VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN** tenemos que la superficie construida consta de 372.37 metros cuadrados (trescientos setenta y dos puntos treinta y siete), según lo manifestado por ambas partes; en multiplicación al Valor Unitario de Construcción para el tipo de edificación consistente en \$ 9,263.00 (nueve mil doscientos sesenta y tres pesos

00/100 M.N.) por metro cuadrado con un demerito de 0.8653 en adición a 1.68 metros cuadrados (uno punto sesenta y ocho) de habitacional y el demerito anteriormente mencionado tenemos un **VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN TOTAL de \$3,341,888.30 (tres millones trescientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos 30/100 M.N.)** por lo que nuevamente se concluye que el cálculo realizado por la autoridad recurrida es correcto.

Por lo que respecta al estudio del **segundo agravio**, en donde el recurrente manifiesta que la resolución que combate es carente de fundamentación y motivación y contraria a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos que, quien recurre señala la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, siendo de observancia las siguientes conceptualizaciones:

Por lo que principalmente debemos contar con la siguiente conceptualización:

1. **Carencia de motivación.** Consistente en la carencia total de expresión de razonamientos.
2. **Carencia de fundamentación.** Consiste en la carencia total de cita de normas jurídicas.

Ahora bien, la carencia de estos conceptos generaría la nulidad para efectos, sin embargo, derivado la documental consistente en oficio **TM/SC/DV/0084/2023** ofrecida por quien recurre en original y por la autoridad recurrida en copia certificada podemos observar que la autoridad recurrida motiva el acto impugnado en lo que a la letra se transcribe:

“...derivado de la información manifestada por el interesado ante esta autoridad, así como la recabada mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital.”
(SIC)

En virtud de dicha transcripción se observa que el acto impugnado si cuenta con la motivación del acto de la cual se deriva de un supuesto de un fragmento correspondiente a la fundamentación desplegada por la autoridad en el multicitado oficio, es decir, del artículo 25 fracción III de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, que a la letra dice:

“ARTICULO 25. La asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y con apoyo en la información resultante de los siguientes procedimientos:

- I. ...
- II. ...
- III. Valuación directa en base a la información recada por la Autoridad Catastral Municipal, mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital...” (SIC)

observándose consecuentemente, dentro del referido oficio la diversa fundamentación del acto, misma que se transcribe a continuación:

“Lo anterior con fundamento en los artículos 1°, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 31 fracción IV, 36, 42 fracción I, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, primer párrafo, numeral 18, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 2, 8, 10, 11, fracción XVIII, 26, 29 fracciones II, XIV, XV, XXXVIII y XLVI, 60 fracción II, 64, fracciones II y XIII, 121, 123, 126, 147 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 4, 5 fracción II, 13, 36, fracciones I y X, 37 fracción II letra B, 38 fracción III y 40 fracción VIII del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua; 1, 2 fracción IV, 3 fracciones III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXXIII, XXIV y XXV; 4 fracción II, 6 fracciones III, VII, IX y XI; 11, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 25 fracción III, 26, 27, 28 fracción II, 29, 30, 31 y 32 último párrafo, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua; 1, 2, 17 fracciones I y VI, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua; en correlación con los Lineamientos de Asignación de Factores de Incremento y Demérito, publicados en la Gaceta Municipal 271-1 de fecha 23 de diciembre del año 2022; Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Chihuahua, publicadas el 24 de diciembre de 2022 en la edición No. 103 del Periódico Oficial del Estado; artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 fracción III, 17, 33 fracción III, 40, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 71, 83 párrafo segundo, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua.” (SIC)

Derivado del articulado anteriormente transcrito y que se reproduce fielmente de lo esgrimido en el acto recurrido se desprende que, el recurrente carece de razón puesto que no existe carencia alguna respecto de la fundamentación.

Con relación a lo anterior, es aplicable el siguiente criterio:

Registro digital: 187531

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.6o.A.33 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1350

Tipo: Aislada

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la

hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1684/2001. Mundo Maya Operadora, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Margarita Guerrero Osio. Secretaria: Patricia Maya Padilla.

Ahora bien, por lo que respecta a la contrariedad al artículo 14 que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, el recurrente carece de razón, toda vez que, la resolución de amparo no constituye ley alguna, adminiculando a que el artículo 73 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, **limitándose a ampararlos y protegerlos**, si procediere, **en el caso especial sobre el que verse la demanda**, es decir, sobre las anualidades dos mil veintiuno y dos mil veintidós.

Por todo lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se **confirma la legalidad del acto impugnado**, consistente en el oficio TM/SC/DV/0084/2023 emitida por la Tesorería Municipal de Chihuahua en base a al considerando quinto de la presente resolución.

SEGUNDO. **Notifíquese** personalmente a la parte recurrente y por oficio a la autoridad impugnada, de acuerdo con lo que establece el artículo 63 fracción I, 64 fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua de aplicación supletoria según lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua.

TERCERO. Hágase la correspondiente **anotación** en el libro de expedientes en trámite y en su oportunidad, **archívese** el presente asunto como definitivamente concluido.

Así lo resolvió y firma el **MAESTRO ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN** Secretario del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua. y sancionado por el **LICENCIADO MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**, Presidente Municipal de Chihuahua; Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 fracción XXXII, 203 fracción X y XI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el día dieciséis de diciembre del dos mil veinticuatro.

Chihuahua, Chihuahua, a los dieciséis de diciembre del dos mil
veinticuatro.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SUBSECRETARÍA JURÍDICA
Chihuahua, Chih.

LICENCIADO MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

MAESTRO ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA.

EAVG/MGSV/SGC

Versión publica de este documento, con partes testadas por contener información confidencial, con fundamento en lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua:

“ARTÍCULO 128. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.
(...)”

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



DEPARTMENT OF DEFENSE
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D.C. 20301

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET